



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: INCIDENTE DE DESACATO – CONSULTA
ACCIONANTE: HERNANDO URIBE MARULANDA
ACCIONADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE VÍCTIMAS – UARIV
RADICADO: 05001 – 31 – 05 – 023 – 2021 – 00395 – 04
ACTA N° 009

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a decidir de plano mediante el presente proveído el grado jurisdiccional de consulta surgido con ocasión de la decisión adoptada en el incidente de desacato incoado por el señor **HERNANDO URIBE MARULANDA** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS - UARIV**.

El expediente llegó al Tribunal Superior de Medellín, por remisión que hizo el Juzgado del conocimiento para que se surtiera el trámite de la Consulta. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 009** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES FÁCTICOS

El señor **HERNANDO URIBE MARULANDA** interpuso acción de tutela en contra de la UARIV, por considerar que se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales. El trámite tutelar concluyó con sentencia de segunda instancia en la cual se **REVOCÓ** la

de primera, y se CONCEDIÓ el amparo, en consecuencia, de ello se ordenó a la accionada¹:

“PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por la **Juez Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín** el **22 de octubre de 2021**, para en su lugar, **TUTELAR** los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad, dignidad humana y al reconocimiento del señor HERNANDO URIBE MARULANDA como víctima del conflicto armado interno.

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas–UARIV - **DEJAR SIN EFECTOS**, a partir de la fecha de esta sentencia, **el Acta Extraordinaria No. 002 del 12 de febrero de 2010**, en las **Resoluciones No. 275714 DEL 4 de octubre de 2013 y 20213607 del 5 de mayo de 2021** mediante las cuales decidió no incluir a HERNANDO URIBE MARULANDA con c.c. 3.555.571 en el Registro Único de Víctimas–RUV–.

TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas –UARIV–que, en el término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, incluya en el Registro Único de Víctimas–RUV–a HERNANDO URIBE MARULANDA con c.c. 3.555.571 por el hecho victimizante del **homicidio** de su **hijo** JAIRO ANTONIO URIBE MARULANDA.

CUARTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas–UARIV–efectuar el **reconocimiento y pago de la reparación administrativa** a la que tiene derecho el padre de JAIRO ANTONIO URIBE MARULANDA **dentro del primer semestre del año 2022**, de conformidad con el análisis efectuado en la parte motiva de esta providencia.

El accionante, radica solicitud de incidente el **10 de enero de 2023** indicando que la accionada no ha cumplido con la orden de tutela²; advirtiéndose que ya se había impetrado un primer incidente el 24 de junio de 2022³.

2. CONSIDERACIONES

Pues bien, para efectuar el análisis debe la Sala partir de una premisa: es claro que el incidente de desacato es un mecanismo de coerción con el que cuentan los jueces en desarrollo de sus poderes disciplinarios, por ello está amparado por los principios del derecho sancionador, otorgándosele garantías al disciplinado. De esta manera, en el desarrollo del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela, siendo claro que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, porque es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela.

¹ Carpeta denominada “02SegundaInstancia” / C02Desacato / “01PrimeraInstancia” Archivo PDF rotulado “007AutoAbreIncidente_p09-p10”

² Carpeta denominada “02SegundaInstancia” / C02Desacato / “01PrimeraInstancia” Archivo PDF rotulado “002EscritoDesacato_p02-p02”

³ Carpeta denominada “02SegundaInstancia” / C01Desacato / Archivo “05AutoRevocaConfirmaSancion023202100395IncidenteConsultaUariv”

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia **C-367 de 2014**, indicó que las autoridades judiciales que deciden un incidente de desacato, deben verificar una serie de requisitos, así:

“(…)” **4.3.4.8.** El trámite de cumplimiento sigue el procedimiento previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que otorga amplios poderes al juez de tutela para hacer cumplir la sentencia, valga decir, para garantizar el cumplimiento material y objetivo de la orden de protección de los derechos amparados. Hay tres etapas posibles en el procedimiento para cumplir con el fallo de tutela: (i) una vez dictado, el fallo debe cumplirse sin demora por la persona a la que le corresponda; (ii) si esta persona no lo cumpliere dentro de las 48 horas siguientes, el juez se debe dirigir al superior de esta persona para que haga cumplir el fallo y abra un proceso disciplinario contra ella; (iii) si no se cumpliere el fallo dentro de las 48 horas siguientes, el juez “ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiera procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo”.

4.3.4.9. De no cumplirse el fallo, entre otras consecuencias, la persona puede ser objeto del poder jurisdiccional disciplinario, que se concreta en el incidente de desacato. Este incidente sigue un procedimiento de cuatro etapas, a saber: (i) comunicar a la persona incumplida la apertura del incidente del desacato, para que pueda dar cuenta de la razón por la cual no ha cumplido y presente sus argumentos de defensa; (ii) practicar las pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes para la decisión; (iii) notificar la providencia que resuelva el incidente; y (iv) en caso de haber lugar a ello, remitir el expediente en consulta al superior. Para imponer la sanción se debe demostrar la responsabilidad subjetiva del sancionado en el incumplimiento del fallo, valga decir, que éste es atribuible, en virtud de un vínculo de causalidad, a su culpa o dolo” (…).”.

Pues bien, verifica esta corporación que el Juez de instancia, inició trámite incidental **agotando el respectivo procedimiento**, así:

- Mediante auto del **18 de enero de 2023**⁴ ordenó requerir a la Dra. **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de Directora de Reparación de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS a fin de acatar las órdenes impartidas en la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021, exhortándola al obedecimiento del fallo y para que diera cuenta de las razones por las cuales se ha sustraído de su acatamiento, otorgándole el término improrrogable de dos (2) para que dé cumplimiento a la orden judicial. Y, se le indicó que una vez vencido dicho plazo sin que hubiese dado cumplimiento, se requeriría al Superior Jerárquico –auto debidamente notificado⁵.
- Luego, mediante auto del **25 de enero de 2023**⁶ al no obtener respuesta por

⁴ Carpeta denominada “02SegundaInstancia” / C02Desacato / “01PrimeraInstancia” Archivo PDF rotulado “003.AutoRequiereAccionada_p03-p03”

⁵ Carpeta denominada “02SegundaInstancia” / C02Desacato / “01PrimeraInstancia” Archivo PDF rotulado “004.NotificaciónRequerimientoPrevio_p04-p05”

⁶ Carpeta denominada “02SegundaInstancia” / C02Desacato / “01PrimeraInstancia” Archivo PDF rotulado “005.AutoRequiereSegundaVezAccionada_p06-p06”

parte de la entidad ni haberse demostrado el reconocimiento y pago de la reparación administrativa ordenada en favor del señor HERNANDO URIBE MARULANTE en sentencia del 10 de diciembre de 2021 se **requirió** a la Dra. MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ - Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas- como Superior Jerárquico, a quien se le concedió el termino de (48) horas para que ordenara el cumplimiento y abriera el correspondiente proceso disciplinario, con la advertencia de qué si en el término dado no se cumplía la orden impartida se abrirá el respectivo incidente de desacato. En la providencia se hace referencia a la existencia de sanción por desacato de fecha 8 de septiembre de 2022. – auto notificado⁷-.

- Por auto del **03 de febrero de 2023**⁸ se dio apertura al incidente en contra de la Directora de Reparaciones de la UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS - Doctora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES - y de la Doctora PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en su carácter de Superior Jerárquico, se les dio traslado nuevamente del escrito presentado por el incidentista para que en el término de tres (3) días ejercieran su derecho de defensa –notificado⁹-.
- Y el Juez de instancia al no encontrar que se hubiese cumplido con la orden constitucional a través de providencia del pasado **10 de febrero de 2023** y al evidenciar *"la falta de voluntad y la total ausencia de respeto frente a la protección de los derechos de rango superior del señor **URIBE MARULANDA**",* decidió sancionar a la Dra. **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de Directora de Reparaciones de la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Dra. **MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** en su carácter de superior jerárquico de la misma Entidad, con tres (03) días de arresto y cinco (05) SMLMV¹⁰.

Lo anterior, en virtud de la **respuesta** emitida por la UARIV a los requerimientos efectuados¹¹ en la que se limitó a indicar que es importante poder determinar "...quiénes son los destinatarios con mejor derecho para recibir la medida y establezca el

⁷ Carpeta denominada "02SegundaInstancia" / C02Desacato / "01PrimeraInstancia" Archivo PDF rotulado "006.NotificaciónAutoRequiereSuperior_p07-p08"

⁸ Carpeta denominada "02SegundaInstancia" / C02Desacato / "01PrimeraInstancia" Archivo PDF rotulado "007.AutoAbreIncidente_p09-p10"

⁹ Carpeta denominada "02SegundaInstancia" / C02Desacato / "01PrimeraInstancia" Archivo PDF rotulado "008.NotificaciónAutoAperturaIncidente_p11-p16"

¹⁰ Carpeta denominada "02SegundaInstancia" / C02Desacato / "01PrimeraInstancia" Archivo PDF rotulado "010AutoImponeSancion_p27-p33"

¹¹ Carpeta denominada "02SegundaInstancia" / C02Desacato / "01PrimeraInstancia" Archivo PDF rotulado "009.RespuestaDesacato_p17-p26"

RADICADO 050013105 – 023 2021 00395 - 04

porcentaje que a cada uno de ellos le corresponde..." y que dicha situación se le informó vía telefónica a DIANA URIBE el 26 de enero de 2023 al celular 3148558565 hora 09:45 AM; además que envió a través del correo electrónico dianamariauribemarulanda@gmail.com el formato para que sea debidamente diligenciado por el accionante y remitido a la UARIV e indicó:

En este orden de ideas, la entidad envió al correo electrónico DIANAMARIAURIBEMARULANDA@GMAIL.COM el formato para que sea debidamente diligenciado por el accionante y pueda remitir al correo electrónico documentacion@unidadvictimas.gov.co, indicando el número del radicado de su caso SIRAV. 14836.

Conforme a lo expuesto, es claro que la entidad si ha adelantado las gestiones administrativas positivas con la participación conjunta de los destinatarios de la medida para finalizar el proceso de documentación del caso que permita establecer si el accionante es destinatario y el porcentaje que recibirá de la medida de indemnización, sin que ello implique la vulneración de los derechos fundamentales de otros destinatarios, es decir estableciendo de manera definitiva que a la víctima directa no le sobrevivan destinatarios con mejor derecho para recibir como hijos o cónyuge, pues en caso de desconocer los derechos de estos destinatarios acarrearía responsabilidades fiscales no solo a cargo de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente ruego a su señoría se tengan en cuenta las acciones positivas adelantadas por la Entidad para acreditar el cumplimiento de la orden y se revoque e inaplique las sanciones impuestas y que se encuentren vigentes en el presente caso.

Pues bien, ha indicado la Corte Constitucional que dentro del incidente de desacato se indaga al obligado por el cumplimiento de la sentencia por las acciones ejercidas, por tanto, la responsabilidad exigida **es objetiva** (satisfacción plena de lo ordenado), **pero para la imposición de las sanciones por desacato, habrá de develarse la demostración de una responsabilidad subjetiva**. Al respecto son pertinentes de la sentencia **T- 271 de 2015**, así:

Asimismo, la Corte ha manifestado que la sanción que puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre sus objetivos está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos fundamentales con ella protegidos

En el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular esta Corporación ha señalado:

"30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respectivo incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos " 12

¹² T- 1115 de 2005

31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.

32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo."13Subrayas fuera de texto).

En consonancia con lo anterior, la Corte ha precisado que en el momento de analizar si existió o no desacato deben tenerse en cuenta situaciones especiales que pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad 14aclarando que no puede imponerse sanción cuando: "(i) la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo (sentencias T-1113 y T-368 de 2005)"

Es así como como **el elemento subjetivo** se refiere a un **obrar negligente del funcionario encargado de dar cumplimiento a la orden de tutela**, por ello es necesario, además de identificar el sujeto destinatario de la orden de tutela, **analizar cuál ha sido la conducta tendiente a su satisfacción** en los mismos términos que fue declarada por el Juez. Y en cuanto a la imposición de la sanción, en sentencia **C- 092 de 1997** se estableció que ella es un reflejo del poder administrativo disciplinario del juez de tutela que persigue el cumplimiento efectivo y oportuno de las órdenes de tutela, así indicó:

"... puede concluirse que la sanción por el desacato a las órdenes dadas por el juez de tutela es una sanción que se inscribe dentro de los poderes disciplinarios del juez, pues su objetivo es el de lograr la eficacia de las órdenes proferidas tendentes a proteger el derecho fundamental reclamado por el actor"

Y en lo referente a la elección y cuantificación de la sanción, debe verificarse que esta sea justa, equitativa y adecuada al propósito dispuesto, toda vez que la sanción será legítima en la medida que sea proporcionada y necesaria para salvaguardar derechos fundamentales. Es por ello que, el juez al momento de tasar la medida correccional debe moverse dentro los rangos legales,

¹³ T – 171 de 2009

¹⁴ T- 171 de 2009

atendiendo a criterios de razonabilidad y aplicando las reglas de la experiencia, para que la sanción a imponer no resulte desproporcional a la actitud del funcionario incumplido. (ver sentencia T- 512 de 2011 de la Corte Constitucional).

Pues bien, luego de imponerse y notificarse la **sanción** la entidad remitió a esta instancia **informe en grado jurisdiccional de consulta**¹⁵ solicitando su **revocatoria** con el siguiente argumento¹⁶:

Para el caso particular de HERNANDO URIBE MARULANDA, al encontrarse bajo situaciones de vulnerabilidad extrema, ha ingresado al procedimiento ya mencionado por la **RUTA PRIORIZADA**, pues su caso se enmarca dentro de los supuestos contenidos en el artículo 4° de la Resolución 1049 de 2019 y se evidenció haber iniciado un proceso de documentación para acceder a la indemnización administrativa, por lo cual se le informó que en atención a verificación la documentación se encuentra incompleta.

Con ocasión a dicho procedimiento se evidenció que HERNANDO URIBE MARULANDA, había iniciado un proceso de documentación para acceder a la indemnización administrativa por el hecho victimizante de HOMICIDIO de JAIRO ANTONIO URIBE MARULANDA, por lo cual se le informó que en atención a verificación la documentación se encuentra incompleta.

En efecto, se indicó en comunicación **emitida bajo el código lex 6863468**, la documentación que debe aportar y que, una vez HERNANDO URIBE MARULANDA haya proporcionado estos documentos, la Unidad para las podrá tomar una decisión de fondo sobre si es procedente o no el reconocimiento de la medida, por lo cual nos encontramos a la espera de la documentación requerida.

Téngase en cuenta, que la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019 estableció que los términos para decidir la solicitud de indemnización administrativa se suspenderán en el evento en que se evidencie que no se tiene la documentación necesaria para adoptar una decisión de fondo, caso en el cual, la Unidad deberá comunicar a la víctima solicitante los documentos que debe allegar para subsanar o corregir la solicitud y reanudar términos.

En consecuencia, con la finalidad de dar continuidad al proceso, mediante comunicación escrita se le brindo a la accionante el correo electrónico documentacion@unidadvictimas.gov.co para que envíe la documentación necesaria para que concluir la fase de solicitud de la indemnización y posteriormente la misma pase a la fase de análisis.

La Sala no acogerá en manera alguna la solicitada impetrada por las siguientes razones:

En primer lugar, porque que en la sentencia emitida por esta corporación el **10 de diciembre de 2021** se ordenó que **antes de finalizar el primer semestre del año 2022** la entidad efectuara el reconocimiento y pago de la indemnización a que tiene derecho el señor HERNÁN URIBE MARULANDA; decisión que se adoptó ante la **actuación negligente e irregular** de la entidad y atendiendo a las particularidades del caso concreto, al contar para aquel entonces con **78 años de edad**.

¹⁵ Carpeta denominada "02SegundaInstancia" / C02Desacato / "02PrimeraInstancia" Archivo PDF rotulado "02CorreolInformeUariv"

¹⁶ Carpeta denominada "02SegundaInstancia" / C02Desacato / "02PrimeraInstancia" Archivo PDF rotulado "02CorreolInformeUariv. **Págs- 14 a 21**"

Los planteamientos que presenta la accionada referidos a un trámite administrativo interno que adelanta para cumplir la orden constitucional notificada desde hace más un año, en manera alguna sirven de argumento para justificar la tardanza en el reconocimiento de la reparación de la víctima de este proceso.

Por el contrario, lo que se advierte es que el incumplimiento subsiste, que la decisión adoptada en la providencia que ahora se revisa se encuentra ajustada a derecho, fue emitida con el respeto del procedimiento previo en este trámite conforme lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y en los precedentes constitucionales sobre la materia; es un hecho cierto que la orden impartida no ha sido satisfecha porque es claro que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas–UARIV– **no efectuó el reconocimiento y pago de la reparación administrativa dentro del primer semestre del año 2022**, ni lo ha hecho para la fecha en que se emite esta providencia.

Y la sanción impuesta a las Doctoras **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de Directora Técnica de Reparación de Antioquia Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y **MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** en su carácter de superior jerárquico con cinco (05) días de arresto y siete (07) SMLMV se encuentra dentro de los rangos establecidos en el Decreto 2591 de 1991. Resulta además legítima en la medida que es proporcionada, equitativa y necesaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante y se sustenta en el obrar negligente de las funcionarias encargadas de dar cumplimiento a la orden constitucional emitida por esta Sala que ha sido abiertamente desconocida.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **RESUELVE:**

CONFIRMAR la sanción impuesta a la Dra. **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y a la Dra. **MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** en su carácter de DIRECTORA DE LA UNIDAD

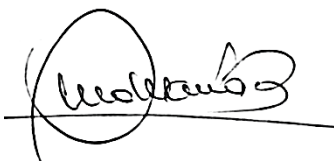
RADICADO 050013105 – 023 2021 00395 - 04

PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, con cinco (05) días de arresto y siete (07) SMLMV por incumplir la orden impartida mediante sentencia del **10 de diciembre de 2021**.

Notifíquese lo decidido a las partes y a la señora Procuradora Regional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 029 del 21 de FEBRERO de 2023.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>